



Al servicio de la paz y la justicia

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Ejecutivo singular
Demandante: Martín Alberto Montoya Gallo
Demandado: Álvaro José Francisco López Ángel y otros
Radicado: 05001 31 03 019 2024 00082 01
Instancia: Segunda
Tema: El título ejecutivo puede comprenderse en uno o varios documetos, solo el análisis de todos, siendo varios, puede dar cuenta de él.
Decisión: Revoca auto
Providencia: Interlocutorio No. 028 de 2024

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la ejecutante, en contra del auto proferido el 04 de marzo de 2024 por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual negó librar mandamiento ejecutivo de pago.

I. ANTECEDENTES.

1.1. EL AUTO IMPUGNADO¹

Para proceder como lo hizo el señor Juez argumentó que el documento anexado como título ejecutivo no cumplía los requisitos para su ejecución por cuanto en su numeral segundo se había establecido que en caso de incumplimiento de pago en los dos meses siguientes a la celebración del negocio, se acordaría un nuevo plazo y se fijaría a partir de allí un interés del 1% mensual sobre el saldo de la obligación, y que como tal

¹ Expediente Digital, Cuaderno C01Principal, 003AutoNiegaMandamiento.pdf

pacto no se acreditó, tal indeterminación en el nuevo plazo afectaba la exigibilidad de la obligación.

Recalcó que, a pesar del requerimiento privado para constituir en mora, y los abonos que se relacionan en la demanda, ello no es suficiente para superar la ambigüedad en ese elemento estructurante del título, pues mientras la misma subsista, correspondería acudir a una acción declarativa para efectos de constituirlo adecuadamente.

1.2. EL RECURSO².

Frente a tal determinación ripostó el ejecutante fustigando al Juez por haber despachado ligeramente la situación, sin el análisis de todos los documentos allegados y sin la suficiente motivación. Insistió en que se trata de una obligación cierta y reconocida por los deudores, incluso en relación con los intereses al punto de haberle hecho abonos, actitud que no se podía desconocer.

Señaló, que si en gracia de discusión fuere cierto que no había quedado determinada la fecha o forma de vencimiento, tenía que tenerse ésta *a la vista* como está regulado para los títulos valores, aunque reconoce que acá se esta es ante un contrato de mutuo.

Y que, en todo caso, que reproches tales harían parte de los mecanismos de defensa de la parte demandada, y no que el Juez los enarbole en su favor.

Resuelto desfavorablemente el primero de los recursos, se concedió el que ahora requiere nuestro análisis.

II PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar en el *sub júdice*, si en efecto, la obligación contenida en el título objeto de ejecución cumple con ser clara, expresa y

² Expediente Digital, Cuaderno C01Principal, 004MemorialRecurso.pdf

exigible como lo pregona el impugnante.

Para resolver lo propio, habrán de tenerse en cuenta las siguientes:

III CONSIDERACIONES

3.1. Es competente la Sala, porque conforme el numeral 4º del artículo 321 del Código General del Proceso, la providencia recurrida es apelable y la sala funge como superior funcional del Juez que la profirió.

3.2. El título ejecutivo como presupuesto de la ejecución. Decantado esta hace rato, y de ello no existe duda ni en el recurrente, y menos en el funcionario que tiene a cargo este asunto, que la condición sin la cual no es posible que se abra para una ejecución como la que se pretende, es la existencia de un documento, cualquiera sea, que satisfaga las exigencias contenidas en el postulado 422 del Estatuto Procesal, repetidas una y otra vez por ambos, esto es, que se trate de obligaciones *claras, expresas y exigibles* que provengan del deudor o constituyan plena prueba en su contra, por modo que si no se evidencia la reunión y/o concurrencia efectiva de estos elementos, el título no poseerá virtud ejecutiva, y carecerá de toda capacidad coercitiva para forzarse el cumplimiento de la prestación intrínseca.

Dada la trascendencia de tales exigencias, la doctrina y la jurisprudencia se han ocupado recurrentemente del tema, al punto que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido cada uno de los presupuestos exigidos a los títulos ejecutivos, aclarando sus alcances y lineamientos, así:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea *inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor.*

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser *explícita, no implícita ni presunta, (...)*, No se trata de

que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente.

Y es **exigible** en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida"³.

Y la doctrina lo ha recalcado así: "debe estar no solo en la forma exterior del documento respectivo, sino más que todo en el contenido jurídico de fondo; pero como la obligación es un ente complejo que abarca varios y distintos elementos, como el objeto, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la causa, **la claridad de ella ha de comprender todos sus elementos constitutivos. En otros términos, la claridad de la obligación se contrapone a la ambigüedad, a la oscuridad, o a la duda y a la confusión**" (negrillas subrayadas fuera del texto), es decir que para otorgarle consigna inequívoca al documento ejecutivo, las descripciones de sus características deben ser completamente comprensibles, sin que suscite contradicciones.

Todo lo anterior tiene sentido, porque en los procesos de esta naturaleza se busca sólo la realización del derecho, no su declaración o constitución, permitiéndole al ejecutante comprometer el patrimonio del deudor como garantía de que ello será así mediante el embargo y secuestro de cualquier bien patrimonial que le pertenezca.

Depurado lo anterior, varias claridades y precisiones puntuales respecto de lo que hasta ahora se ha planteado en esta Litis:

a. Las decisiones judiciales no se cuestionan o reviran mediante epítetos o señalamientos injuriosos, y descalificativos al Juez. Es un debate dialectico que se debe surtir solo en el escenario de los argumentos jurídicos y fácticos propios del caso, y si es que acaso, en verdad el Juez los obvió, el abogado, haciendo gala de su erudición, los expone simplemente, pero hasta ahí, no tiene por qué entrar a mancillar la dignidad del Juez por más

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC 3298 de 2019, M.P Luis Armando Tolosa Villabona.

⁴ Curso de Derecho Procesal Civil Parte Especial, Hernando Morales Molina.

desacertado que parezca. Situación que también debe leerse de manera bifronte, es decir del Juez a las partes, y entre las partes mismas. Todo debe desenvolverse dentro del respeto mutuo.

b. No puede existir duda que, si la condición indispensable para surja a la vida jurídica un proceso ejecutivo, es que se satisfagan todos y cada uno de los requisitos antes vistos, es el Juez quien obligatoriamente, no es una mera potestad, debe verificar que el documento que se aporte con ese fin, en efecto, los satisfaga, no es algo que se pueda diferir a la eventual controversia del ejecutado, lo que entonces descarta un proceder parcializado.

c. Muchas veces, ese título ejecutivo no está representado en un solo documento, a veces, no pocas, es necesario acudir al análisis de varios para establecerlo, es lo que la doctrina denomina *títulos complejos*. Claro, no haciendo suposiciones o conjeturas, o esfuerzos para desentrañar sus elementos constitutivos, sino que de la conjunción de todos ellos dimane la obligación objeto de ejecución.

d. En lógica jurídica, si el documento que se anexa, NO es un título valor entonces no es posible que se le apliquen las disposiciones previstas para estos instrumentos cambiarios regulados por el estatuto mercantil –Art. 673 Núm. 1, y Art. 711-. Pues como es también sabido y así lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil: “... **la imposibilidad de confundir el “título ejecutivo con título valor”**, pues cada uno responde a características jurídicas que los diferencian, aspecto sobre el cual esta Corte ha advertido: “(...) **todo título valor puede ser título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es un título valor**. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación **son de carácter taxativo**, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales (...).”⁵

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC 290 de 2021, M.P Luis Armando Tolosa Villabona.

e. Y, por último, que los jueces siempre deberíamos ser más proclives a mirar las reales posibilidades de realizar los derechos sustanciales que invocan los justiciables, sin forzar el derecho claro está, pero sí auscultando el sentido lógico de las cosas.

Examinando los documentos que a esta demanda se anexan como soporte de la obligación a ejecutar, en efecto es cierto que en el primero de ellos denominado "COMPROMISO DE PAGO" en él se pactó que *"2. El pago antes mencionado se hará en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la firma del presente acuerdo, durante los cuales no se generarán intereses."*, lo cual significa que, en principio, las partes **SÍ** pactaron una fecha cierta y determinada de la obligación, esto es, dos meses después de asumido el compromiso, que como se suscribió **el 15 de noviembre de 2019**, ese plazo se vencía **el 15 de enero de 2020**. En ese sentido el requisito de la *exigibilidad* echado de menos por el Juez, estaba plenamente satisfecho para la fecha de presentación de la demanda. Ahora, que en el mismo documento se hubiera pactado igualmente que: *"3. En caso de no cumplir con el pago total de lo acordado en el plazo señalado, se acordará un nuevo plazo durante el cual se cobrará un interés del 1% mensual sobre la suma impagada."*, no significa que entonces ello torne ambiguo o indeterminado el tiempo que se tenía para pagar la obligación, pues sino se realizaba ese otro acuerdo, seguían siendo los mismos dos meses, ello era apenas una posibilidad para las partes, y si se quiere, en favor de los deudores, pero que como no hubo manifestación de voluntad en tal sentido, o por lo menos, en esta etapa liminar del proceso no aflora, indefectiblemente el vencimiento de la obligación seguía siendo el inicialmente acordado, dos meses máximo después de la suscripción del pacto.

En lo que tiene que ver con los intereses que también se reclaman del 1% mensual sobre el saldo de la deuda, en el documento del 11 de marzo de 2020, que se suscribe por los mismos demandados como constancia de un abono a la obligación por valor de \$200.000.000, puntualmente se dijo que: *"El dinero entrado se aplica al capital, quedando pendiente la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (187.000.000 COP), **más los***

intereses mensuales pactados (1% mensual) sobre el valor de la deuda restante." Si bien se utilizó la expresión "*pactados*" como si fuera en pasado, lo cierto es que tal pacto aún no se había dado, pero como ese documento en su parte inicial hizo referencia clara al acuerdo de pago que se ejecuta, y allí las partes también expresaron su intención de que los intereses que se generarían serían del 1% mensual sobre el saldo insoluto, es apenas consecuente concluir que es a partir de este momento que ellos aceptaron el pago de los mismos, sin que al respecto se pueda predicar ambigüedad o indeterminación, máxime que pudiendo, salvedad o aclaración alguna consignaron allí los ahora ejecutados al momento de suscribirlo, que por supuesto serán de mora, porque como se anunció, para ese momento ya la obligación estaba vencida, y por escrito no quedó acordado algún otro plazo.

Así las cosas, de esos documentos fluye evidente el título ejecutivo que soporta la ejecución que se pretende, porque se tiene claro, quién y a quién se debía pagar la obligación, el monto específico y concreto de la misma teniendo en cuenta los abonos que confiesa el ejecutante, la fecha cierta en que ese pago debía hacerse, así como los intereses que generaría, documentos que provienen de los deudores en tanto están suscritos por ellos, salvo que en el devenir se demuestre lo contrario. En suma, se satisfacen los presupuestos que condicionalmente establece el artículo 422 tantas veces citado.

En el anterior orden de ideas, es claro que cuando se trata de este tipo de obligaciones puras y simples, cuyo cumplimiento se pacta a un plazo cierto y determinado⁶, no es necesaria la constitución en mora, más allá del entendimiento que de esa figura le dio el señor apoderado del ejecutante.

Consecuentemente, habrá de revocarse la decisión cuestionada, para en su defecto emitir la que legalmente corresponde en esta instancia, es decir librar mandamiento ejecutivo como fuere procedente, precisando que el abono de los \$75.000.000 de pesos realizado el día 29 de mayo de

⁶ Artículo 1608 del Código Civil

2023 se imputará en su momento cuando haya lugar a liquidar los intereses de mora.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN SALA CIVIL UNITARIA;**

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto objeto de impugnación, de fecha y naturaleza ya indicados, conforme a las razones expuestas en la motivación.

SEGUNDO: En su defecto, se dispone **LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO** a favor de **Martín Alberto Montoya Gallo** y en contra de **ALVARO JOSE FRANCISCO LOPEZ ANGEL, MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL y JUAN CAMILO DIAZ RIVERA**, por la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$187.000.000)**, como capital insoluto, más los intereses moratorios a la tasa del 1% mensual, **desde 11 de mayo de 2023**, hasta el pago total de la obligación. Cuando haya lugar a liquidar estos últimos se tendrá en cuenta el abono de los \$75.000.000, referido en la parte motiva.

TERCERO: CONCEDER a la parte demandada el término de cinco (5) días para pagar o de diez (10) días para proponer excepciones de mérito (Art. 442 C.G.P.), ambos términos contados a partir de la notificación que se le haga de la presente providencia.

CUARTO: REQUERIR a la parte demandante para que gestione la notificación de los demandados, en los términos del artículo 291 del C.G.P., en las direcciones físicas enunciadas; o en los términos del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, en las direcciones electrónicas también indicadas.

QUINTO: RECONOCER personería al doctor **CARLOS ALBERTO LÓPEZ ALZATE**, identificado con la T.P. 78.615 del C.S.J., para representar a la parte demandante en los términos y para los efectos del poder conferidos. Art. 77 del Código General del Proceso.

SEXTO: El juez de primera instancia se pronunciará frente a las medidas cautelares solicitadas en escrito separado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA
Magistrado

Firmado Por:
Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f2d9805febd8824c49d9bef2f775232820373f2d548714e580e1391478953905**

Documento generado en 17/04/2024 05:09:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>